

Convocatoria para el ingreso, mediante oposición, de cincuenta y una plazas del puesto de trabajo de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

(Aprobada por Resolución 556/2025, de 24 de febrero, del Director General de Función Pública y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 53, de 17 de marzo de 2025)

PRUEBA

(4 DE OCTUBRE DE 2025)

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en relación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Española:

- a) Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley.
- b) La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
- c) Los extranjeros serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que pudiera establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
- d) La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, respecto a quienes ostentan legitimación para interponer el recurso contencioso electoral o para oponerse a los que se interpongan:

- a) Los candidatos proclamados o no proclamados.
- b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción.
- c) Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción.
- d) El Defensor del Pueblo u órgano autonómico equivalente.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los siguientes casos:

- a) Cuando incurra en cualquier conducta tipificada en el Código Penal.
- b) Cuando así lo disponga una disposición de rango legal.
- c) Cuando vulnere en cualquier momento la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 6/2002.
- d) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002.

4. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española:

- a) Los Decretos-leyes pueden ser dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
- b) Los Decretos-leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
- d) Los Decretos-leyes, durante el plazo establecido en el apartado anterior, podrán ser tramitados por el Congreso como proyectos de ley por el procedimiento ordinario.

5. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Española:

- a) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- b) La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
- c) La circunscripción electoral es la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
- d) Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Española, la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno:

- a) Será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- b) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
- c) La prerrogativa real de gracia será aplicable a los supuestos del artículo 102 de la Constitución Española.
- d) En cualquier caso, podrá ser instada por la mayoría absoluta de las Cortes Generales.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía deberán contener:

- a) La denominación de la Comunidad que determine el Parlamento autonómico.
- b) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- c) Las competencias no asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
- d) El régimen de incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo autonómico.

8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional:

- a) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.
- b) Será exigible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- c) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- d) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

9. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

- a) Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
- b) El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
- c) El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, sobre los conflictos en defensa de la autonomía local:

- a) Están legitimados para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local un número de municipios que supongan al menos un sexto de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un séptimo de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.
- b) Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local será necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mismas.
- c) Están legitimados para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un tercio de la población oficial.
- d) El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los diez días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

11.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:

- a) El Consejo Fiscal se constituirá, bajo la Presidencia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, por el o la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector o la Fiscal Jefa Inspectora y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
- b) Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto la persona titular de la Fiscalía General del Estado, el o la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, se elegirán, por un período de cuatro años, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el cincuenta por ciento de los Vocales electos, por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo, constituidos en un único colegio electoral en la forma que reglamentariamente se determine.
- c) No podrán ser elegidos vocales del Consejo Fiscal los Fiscales que presten sus servicios en la Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
- d) El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de su Presidente.

12. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”, a efectos de esta ley se consideran personas detenidas ilegalmente:

- a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, cuando concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
- b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
- c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
- d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona interesada en el procedimiento administrativo.

13. Señale cuál de los siguientes textos NO tiene la consideración de derecho derivado de la Unión Europea:

- a) Reglamento.
- b) Directiva.
- c) Tratados modificativos.
- d) Decisiones.

14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:

- a) Sobre las acciones derivadas de los contratos de agencia internacional en el ámbito de la Unión Europea.
- b) Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones.
- c) Sobre las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
- d) Sobre los recursos interpuestos por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares contra los Estados o instituciones que hayan incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

15. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. En relación con lo dispuesto en el artículo 45.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión implicará el derecho:

- a) De responder a ofertas efectivas de trabajo.
- b) De residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales.
- c) De desplazarse por cuenta y bajo la dirección de su empresa en ejecución de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación de servicios, que esté establecido o que ejerza su actividad en el territorio de un Estado miembro.
- d) De permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.

16. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con las ayudas de Estado y su control por la Unión Europea:

- a) Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
- b) Son compatibles con el mercado interior las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos.
- c) Pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
- d) Pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común.

17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

- a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
- b) Por los convenios colectivos.
- c) En todo caso, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo.
- d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- a) Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
- b) Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
- c) Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
- d) Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.

19. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones contributivas:

- a) Todos los españoles residentes en territorio español.
- b) Todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en territorio español.
- c) Todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan, legalmente o no, en territorio español.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, excepcionalmente se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, siempre que en ellos se establezca así expresamente.
- b) La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
- c) Generalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en procedimientos iniciados de oficio, aun cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de competencias delegadas podrán ser observadas por el resto de los órganos administrativos que no dependan jerárquicamente de los mismos, si no afectan al ejercicio de sus propias competencias.

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, cuál de los siguientes NO es un principio de buena regulación:

- a) Principio de necesidad.
- b) Principio de celeridad.
- c) Principio de simplicidad.
- d) Principio de accesibilidad.

22. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) El sector público institucional se integra, entre otros, por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica al sector público que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
- c) Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas y las Universidades Públicas.
- d) El sector público institucional se integra, entre otros, por las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**

- a) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia pero no de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- b) La encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- c) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- d) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

24.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en relación con el régimen jurídico aplicable a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:

- a) Quedan sometidas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando dichas entidades ejerzan potestades administrativas.
- b) Quedan sujetas a los principios generales previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- d) El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no es extensible a los daños ocasionados a los particulares por las entidades instrumentales de derecho privado.

25. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- a) Los menores de edad, siempre y cuando tengan dieciséis años cumplidos, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- b) Los menores de edad siempre y cuando se hallen emancipados por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, por concesión judicial o por matrimonio.
- c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la regulación que contiene la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la sede electrónica:

- a) Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio que permita identificar a las autoridades y al personal a su servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos administrativos.
- b) En todo caso, las personas físicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en su sede electrónica para la realización actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera.
- c) Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán eximir de la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos en su sede electrónica, para determinados procedimientos, a las entidades sin personalidad jurídica en las que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

27.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referido a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas:

- a) Transcurridos dos años de su presentación, los documentos en soporte no electrónico que se encuentren en las oficinas de asistencia en materia de registros serán objeto de una copia electrónica auténtica de conformidad con los requisitos que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad y su normativa técnica complementaria, para su registro e incorporación al correspondiente expediente electrónico.
- b) Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.
- c) Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante dos años para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor.
- d) Las copias auténticas habrán de expedirse a partir de un original para tener la misma validez y eficacia que este.

28. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la exclusión de la caducidad:

- a) No es oponible a terceros de buena fe.
- b) No podrá aplicarse en los procedimientos iniciados a instancia de parte.
- c) Es posible cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

29. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la suspensión del plazo máximo para resolver:

- a) Se podrá acordar cuando se promueva la recusación.
- b) Será automática cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
- c) Se podrá acordar cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
- d) De acordarse la suspensión, su duración no podrá ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.

30. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerirán motivación por parte de las Administraciones Públicas:

- a) Las resoluciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas.
- c) Las solicitudes de cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la regulación que contiene la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la práctica de la notificación a través de medios electrónicos cuando esta sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:

- a) Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos con la puesta a disposición de la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
- b) Para que pueda considerarse cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos será necesario que se produzca el acceso del interesado a la notificación electrónica o su rechazo. La notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.
- c) Para que pueda considerarse cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos será necesario que el interesado acceda a la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución.
- d) Cuando el interesado rechace la notificación, para que pueda considerarse cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será necesaria su práctica mediante un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

32.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la audiencia de los interesados en los procedimientos de resolución de recursos administrativos:

- a) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se podrán poner de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
- b) No podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.
- c) Tendrán el carácter de documentos nuevos los que los interesados hubiesen aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada y no se hubiesen tenido en cuenta al dictar esta.
- d) No podrá solicitarse la práctica de pruebas que hubiesen sido rechazadas en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida.

33.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el inicio del procedimiento por denuncia:

- a) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de la infracción y no existan otros infractores, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario.
- b) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
- c) No se tramitarán las denuncias que no incorporen elementos de prueba que permitan realizar una verificación razonable de los hechos en ellas relatados.
- d) La denuncia podrá formularse de forma anónima o no anónima; en este segundo caso se garantizará la reserva de identidad del denunciante, de modo que esta no sea revelada a terceras personas.

34. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la regulación que contiene la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la instrucción del procedimiento:

- a) Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para la implantación progresiva, en las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos, de mecanismos que garanticen el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes.
- b) Cuando el interesado alegue discriminación basada en indicios fundados sobre su existencia, se le requerirá la aportación de una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada.
- c) Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- d) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá, salvo disposición legal expresa en contrario, que éste tiene carácter facultativo y no vinculante.

35.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la terminación convencional:

- a) Los acuerdos de terminación convencional requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
- b) Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos de terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos de terminación convencional deberán ser objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según corresponda, para general conocimiento.
- d) El acuerdo alcanzado entre las partes tendrá, en todo caso, la consideración de acto finalizador del procedimiento administrativo.

36.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la regulación que contiene la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la ejecución de los actos administrativos:

- a) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.
- b) No se podrán admitir a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas por vía de hecho.
- c) No podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- d) Todas las anteriores son correctas.

37.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la declaración de lesividad:

- a) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera notificado a los interesados la declaración de la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- c) La declaración de lesividad será susceptible de recurso en vía administrativa.
- d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo objeto de revisión.

38.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la regulación que contiene la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado adoptada con ocasión de la interposición de un recurso administrativo:

- a) La suspensión no podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa.
- b) La suspensión se levantará automáticamente cuando de ella puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza.
- c) Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
- d) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el acuerdo de suspensión incluirá la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

39. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

- a) Los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, cuando tengan por objeto reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
- b) Los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
- c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
- d) Los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.

40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿Qué plazo tiene que transcurrir a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c) de dicha ley, para que cualquiera de las partes y personas afectadas pueda instar su ejecución forzosa?

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) 10 días.
- d) 15 días.

41. Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

- a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control;
- b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
- c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) Legalidad, publicidad, eficiencia, eficacia, descentralización, igualdad, y no discriminación.

42. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública Foral de Navarra:

- a) El ejercicio de la potestad sancionadora en la Administración Pública Foral corresponderá a los órganos que la tengan atribuida expresamente por disposición de rango legal o reglamentario.
- b) En defecto de atribución expresa, la competencia para el inicio y la resolución del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la dirección general competente por razón de la materia.
- c) El ejercicio de la potestad sancionadora en la Administración Pública Foral corresponderá únicamente a los órganos que la tengan atribuida expresamente por disposición de rango legal.
- d) No es posible desconcentrar la titularidad y el ejercicio de las competencias sancionadoras en órganos jerárquicamente dependientes de aquellos que las tengan atribuidas.

43. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Española:

- a) Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción, de sitio y de guerra, y las competencias y limitaciones correspondientes.
- b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, sin que sea necesaria la previa autorización del Congreso de los Diputados.
- c) El estado de sitio será declarado por la mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- d) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo

44. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA de acuerdo con la regulación que contiene la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, en relación con el procedimiento general expropiatorio:

- a) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
- b) Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia, se observará el régimen establecido al efecto en el Concordato vigente, ajustándose en lo demás a lo preceptuado en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
- c) La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado.
- d) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de dos meses.

45. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral:

- a) La creación de fundaciones públicas se hará por orden foral de la persona titular del Departamento interesado, previo informe de los Departamentos competentes en materia de función pública, organización administrativa y economía.
- b) El acuerdo de creación de las fundaciones públicas aprobará los estatutos por los que se habrá de regir la fundación pública, los cuales deberán reflejar, además de los aspectos contemplados en la Compilación del Derecho Civil Foral, el Departamento al que se adscriben, las facultades que se reserva la Administración fundadora en detrimento del patronato y su forma de participar en el mismo.
- c) La Administración fundadora podrá reservarse, la facultad de modificar, fusionar y extinguir la fundación pública.
- d) No resulta necesaria la publicación de los estatutos de las fundaciones públicas en el Boletín Oficial de Navarra.

46. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en la Administración Pública Foral, el órgano competente para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial será:

- a) La persona titular de la dirección general cuya actuación haya podido generar la responsabilidad patrimonial.
- b) La persona titular del Departamento competente en materia de economía, salvo en el caso de los Organismos Autónomos.
- c) La persona titular del Departamento cuya actuación haya podido generar la responsabilidad patrimonial, salvo en el caso de los Organismos Autónomos.
- d) El Gobierno de Navarra, en el caso de reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que se solicite una indemnización en cuantía igual o superior a trescientos mil euros.

47. Indique la respuesta INCORRECTA. En relación con los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector público:

- a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales.
- b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento.
- c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
- d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

48.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la regulación que contiene la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico Sector Público, respecto a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en que se organiza territorialmente la Administración General del Estado:

- a) Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas
- b) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno
- c) Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía
- d) En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no podrán crearse Subdelegaciones del Gobierno.

49.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el principio de colaboración en las relaciones interadministrativas, debe entenderse como:

- a) La asunción de compromisos específicos en aras de una acción común.
- b) La obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico
- c) El deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.
- d) El deber de compartir el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.

50. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841:

- a) Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que rigen o se adopten en lo sucesivo por la Diputación provincial.
- b) Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con arreglo a su legislación especial.
- c) Las rentas provinciales y derechos de puertas se extienden a Navarra desde su entrada en vigor.
- d) La Diputación provincial de Navarra será presidida por el Vocal Decano.

51. Indique la respuesta INCORRECTA en relación con la cuestión de confianza regulada en el artículo 34 de la LORAFNA:

- a) El Presidente de la Comunidad Foral de Navarra podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa de actuación, en la forma que se determine en el Reglamento de la Cámara.
- b) Si el Parlamento niega su confianza al Presidente de la Comunidad Foral, éste convocará elecciones inmediatamente.
- c) La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los parlamentarios forales.
- d) Si el Parlamento niega su confianza al Presidente de la Comunidad Foral, éste presentara inmediatamente su dimisión, procediéndose a continuación a la elección de un nuevo Presidente.

52. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, ¿En qué plazo deben dictarse y publicarse los Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria?

- a) En el plazo de quince días desde la publicación de la modificación tributaria estatal.
- b) En el plazo de un mes desde la aprobación de la modificación tributaria estatal.
- c) En el plazo de dos meses desde la publicación de la modificación tributaria estatal.
- d) En el plazo de tres meses desde la aprobación de la modificación tributaria estatal.

53. En relación con lo dispuesto en el artículo 70 de la LORAFNA los Convenios y acuerdos de Cooperación entre Navarra y las Comunidades Autónomas:

- a) Navarra podrá celebrar Convenios con las Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de los servicios públicos correspondientes a materias de competencia local, autonómica o estatal.
- b) Los Convenios que celebre Navarra con las Comunidades Autónomas entrarán en vigor a los cuarenta y cinco días de su comunicación a las Cortes Generales salvo que éstas acuerden en dicho plazo que, por su contenido, el Convenio debe seguir el trámite previsto para los Acuerdos de Cooperación.
- c) Navarra podrá celebrar Convenios con las Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a materias de su exclusiva competencia.
- d) Los Convenios que celebre Navarra con las Comunidades Autónomas entrarán en vigor a los dos meses de su comunicación a las Cortes Generales salvo que éstas acuerden en dicho plazo que, por su contenido, el Convenio debe seguir el trámite previsto para los Acuerdos de Cooperación.

54.Indique cuál de las afirmaciones es correcta en relación con la regulación que contiene la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de Navarra:

- a) Son órganos de la Cámara de Comptos de Navarra, el Presidente, los Vocales y la Secretaría General.
- b) El Presidente de la Cámara será nombrado por el Parlamento de Navarra por un período de seis años.
- c) Aprobar el programa anual de fiscalización a desarrollar por la Cámara de Comptos es función de la Secretaría General de la Cámara.
- d) Dirigir y coordinar la Asesoría Jurídica es función del Presidente de la Cámara de Comptos.

55.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la regulación que contiene la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra:

- a) Los actos celebrados por personas de condición foral perderán su validez por quedar estas sometidas posteriormente a otro Derecho. Deberá realizarse un acto nuevo sometido al Derecho correspondiente.
- b) La condición foral se regulará por las normas generales del Estado en materia de vecindad civil.
- c) La condición foral de las personas jurídicas se establece en la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra.
- d) La condición foral se regulará por las normas navarras en materia de vecindad civil y no por las normas generales del Estado en dicha materia.

56. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA de acuerdo con la regulación que se contiene la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera:

- a) El castellano y el euskera son lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y a usarlas.
- b) El castellano y el euskera son lenguas oficiales de Navarra tanto en la zona mixta como en la zona vascófona.
- c) Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la propia Ley.
- d) Es un objetivo esencial de la Ley del Euskera, proteger la recuperación y el desarrollo del euskera en Navarra, señalando las medidas para el fomento de su uso.

57. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente:

- a) El Gobierno de Navarra nombrará, mediante Decreto Foral del Gobierno de Navarra, una o un portavoz del Gobierno.
- b) La o el portavoz del Gobierno de Navarra será necesariamente una Consejera o un Consejero.
- c) En caso de no ser Consejera o Consejero, la Portavoz o el Portavoz del Gobierno tendrá rango de Directora o Director de Servicio.
- d) La Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra podrá nombrar una o un Portavoz del Gobierno, sin que dicho cargo haya de recaer necesariamente en una Consejera o Consejero.

58. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente:

- a) El nombramiento de la Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra corresponde al Presidente del Parlamento de Navarra y será publicado en el Boletín Oficial del Parlamento. La toma de posesión se llevará a cabo dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Parlamento.
- b) El nombramiento de la Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra corresponde al Rey, mediante Real Decreto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Navarra. La toma de posesión se llevará a cabo dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra.
- c) El nombramiento de la Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra corresponde al Presidente del Parlamento de Navarra y será publicado en el Boletín Oficial de Navarra. La toma de posesión se llevará a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra.
- d) El nombramiento de la Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra corresponde al Rey, mediante Real Decreto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Navarra. La toma de posesión se llevará a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

59. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, señale cuál de las siguientes NO está incluida en el ámbito objetivo de la Ley:

- a) La organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
- b) Las relaciones entre la Administración Pública Foral y la ciudadanía en el marco de la normativa vigente.
- c) La elaboración y mantenimiento de un marco normativo de calidad en colaboración con la ciudadanía.
- d) Los principios del sistema de responsabilidad de la Administración Pública Foral y de la potestad sancionadora.

60. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral:

- a) Las Secretarías Generales Técnicas son las unidades orgánicas horizontales de cada Departamento, que bajo la inmediata dependencia de la Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra, ejercen las competencias que reglamentariamente se les atribuyan.
- b) Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, que tendrán el rango de Directora o Director de Servicio, serán nombradas y cesadas por libre designación mediante decreto foral del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los Departamentos competentes, entre el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral.
- c) Sus decisiones administrativas adoptarán la forma de orden foral, y serán firmadas por las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas.
- d) Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, que tendrán el rango de Directora o Director de Servicio, serán nombradas y cesadas por libre designación mediante orden foral de las personas titulares de los Departamentos competentes, entre el personal funcionario de cualquiera de las administraciones públicas de Navarra.

61. Según el artículo 75 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, ¿A quién compete determinar los sistemas de identificación y firma electrónica que debe utilizar el personal al servicio de la Administración Pública Foral?

- a) A los órganos competentes en materia de función pública y de administración electrónica.
- b) Al Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de Gobierno.
- c) Al Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral.
- d) A los órganos competentes en materia de economía y hacienda.

62. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, ¿Qué convenios se deben remitir a la Cámara de Comptos?

- a) Los convenios con compromisos económicos superiores a 600.000 euros se remitirán, en el plazo de los dos meses siguientes a su suscripción a la Cámara de Comptos.
- b) Los convenios con compromisos económicos superiores a 600.000 euros se remitirán, en el plazo de los tres meses siguientes a su suscripción a la Cámara de Comptos.
- c) Los convenios con compromisos económicos superiores a 500.000 euros se remitirán, en el plazo de los tres meses siguientes a su suscripción a la Cámara de Comptos.
- d) Ningún convenio se debe remitir a la Cámara de Comptos.

63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el Derecho de Petición recogido en el artículo 107 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral?

- a) Cualquier persona tiene derecho a presentar sugerencias, reclamaciones y quejas relativas a la actividad o al funcionamiento de los servicios públicos de la Administración Pública Foral.
- b) Toda persona tiene derecho a que los órganos integrantes de la Administración Pública Foral traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
- c) Cualquier persona tiene el derecho de petición ante la Administración Pública Foral, de acuerdo con la Constitución Española y la ley orgánica que lo regula.
- d) Las personas tienen derecho a que la prestación de los servicios públicos se efectúe con un nivel de calidad suficiente, estableciéndose modelos de gestión que posibiliten su mejora continua y la evaluación de la calidad.

64. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a los efectos de esta Ley Foral se entiende por publicidad activa:

- a) La obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva aquella información pública que resulte relevante para garantizar la transparencia de la actividad pública y la acción de gobierno.
- b) Aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean.
- c) La posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades contempladas en el ámbito de aplicación de esta ley foral, con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley foral.
- d) El valor esencial del sistema de Gobierno Abierto, que impregna toda la actividad y organización de los sujetos obligados que tiene el deber de poner a disposición de la ciudadanía, legítima propietaria de la información pública, bien de manera proactiva, bien previa solicitud, la información pública que posean y de dar a conocer el proceso y las decisiones adoptadas de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones y la evaluación de las mismas.

65. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, forman parte del Consejo Navarro de Igualdad:

- a) Mujeres representantes de organizaciones o entidades ciudadanas representativas de intereses sociales o grupos vulnerables, siendo reflejo de la diversidad de las mismas.
- b) Personas designadas por el Parlamento de Navarra.
- c) Mujeres representantes del movimiento asociativo de mujeres y grupos feministas.
- d) Representantes de las Entidades Locales de Navarra.

66.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, forman parte del Consejo Navarro de Discapacidad:

- a) Dos personas designadas libremente por la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales entre el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
- b) Una persona designada libremente por el departamento u organismo competente en materia de empleo.
- c) Una persona designada libremente por el departamento u organismo competente en materia de función pública.
- d) Una persona del Instituto Navarro para la Igualdad.

67.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra:

- a) El Consejo estará integrado por seis miembros nombrados entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia profesional de, al menos, diez años y que tengan la condición política navarra. Serán nombrados por un período de seis años y podrán ser reelegidos.
- b) El Consejo estará integrado por cinco miembros nombrados entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia profesional de, al menos, diez años y que tengan la condición política navarra. Serán nombrados por un período de cinco años y podrán ser reelegidos.
- c) El Consejo estará integrado por cinco miembros nombrados entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia profesional de, al menos, quince años y que tengan la condición política navarra. Serán nombrados por un período de ocho años y no podrán ser reelegidos.
- d) El Consejo estará integrado por seis miembros nombrados entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia profesional de, al menos, quince años y que tengan la condición política navarra. Serán nombrados por un período de cinco años y no podrán ser reelegidos.

68.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra:

- a) El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.
- b) El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra tomará posesión de su cargo ante la Presidenta del Gobierno de Navarra, prestando juramento o promesa de respetar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes, así como de desempeñar fielmente, su función.
- c) La Mesa del Parlamento de Navarra acreditará con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y en el Boletín Oficial del Estado.
- d) La Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra será la competente para dictaminar por mayoría simple de los votos de la Comisión cualquier estado de duda o controversia sobre las situaciones de incompatibilidad que pudieran afectar al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Su dictamen será elevado a la Mesa del Parlamento.

69.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 50 de la LORAFNA, Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- a) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- b) Caza; pesca fluvial y lacustre: acuicultura
- c) Espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con la legislación básica del Estado
- d) Establecimientos y productos farmacéuticos.

70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra:

- a) Para la exacción y gestión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostentará ciertas facultades y prerrogativas de las que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado, así como aquellas otras que se reconozcan en la presente Ley Foral.
- b) Para la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostentará las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado.
- c) Para la exacción, recaudación e inspección de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostentará las facultades y prerrogativas que no tenga reservadas la Hacienda estatal.
- d) Para la inspección y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostentará otras facultades y prerrogativas que no tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado.

71. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Foral 13/2007, de 4 abril, de la Hacienda Pública de Navarra:

- a) Los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra sólo se podrán enajenar, gravar o arrendar fuera de los casos regulados por las leyes, cuando concurran razones de interés general, que deberán ser motivadas.
- b) Los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra no se podrán enajenar o gravar fuera de los casos regulados por las leyes. Excepcionalmente, los derechos económicos se podrán arrendar al margen de los casos regulados por las leyes, siempre que concurran motivos de interés general, que deberán ser motivados.
- c) Los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra no se podrán enajenar, gravar ni arrendar fuera de los casos regulados por las leyes.
- d) No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra, ni someter a arbitraje las contiendas que sobre los mismos se susciten, sino mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Presupuestos.

72. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, el Gobierno de Navarra a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda aprobará el límite presupuestario, fijando además el límite de gasto no financiero. De acuerdo con los límites anteriores el Consejero de Economía y Hacienda determinará las directrices económicas y técnicas para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio siguiente, y:

- a) Los departamentos de la Administración de la Comunidad Foral elaborarán los anteproyectos de sus presupuestos ajustándose a dichas directrices, y los remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, junto con los de los organismos autónomos a ellos adscritos.
- b) Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas elaborarán los anteproyectos conforme a las directrices indicadas, remitiéndolos al Parlamento de Navarra a efectos de su inclusión en el texto de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.
- c) Los departamentos de la Administración de la Comunidad Foral elaborarán los anteproyectos de sus presupuestos ajustándose a dichas directrices, y los remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, sin incluir los de los organismos autónomos a ellos adscritos, que los remitirán directamente al Departamento de Economía y Hacienda.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

73. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública:

- a) A los valores representativos de la Deuda de Navarra les será de aplicación el régimen establecido en cada caso por la normativa tributaria vigente en el ámbito de la Comunidad Foral.
- b) A los títulos al portador de la Deuda de Navarra que hayan sido robados, hurtados o sufrido extravío o destrucción, les será aplicable el procedimiento establecido administrativamente o, en su defecto, el previsto por Policía Foral de Navarra.
- c) El Consejero de Economía y Hacienda determinará el procedimiento a seguir cuando se trate de títulos nominativos o al portador extraviados después de su presentación en las respectivas oficinas públicas o que hayan sido objeto de destrucción parcial que no impida su identificación.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

74. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra, en materia tributaria, el vencimiento del plazo establecido para el pago sin que este se efectúe:

- a) Determinará la intimación sobre el deudor por parte de la administración tributaria, encaminada al pago.
- b) Determinará la ejecución forzosa de la deuda.
- c) Determinará el devengo de intereses de demora.
- d) Determinará la incoación del expediente sancionador.

75. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, a los efectos de la misma:

- a) Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
- b) Se entiende que un beneficiario subcontrata sólo cuando encarga a otra empresa la ejecución total de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda incluido en este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
- c) Se entiende que un beneficiario subcontrata sólo cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda incluido en este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
- d) Se entiende que un beneficiario subcontrata sólo cuando encarga a entidades sin ánimo de lucro la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

76. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando se contrate con Uniones Temporales de Empresas o con personas que participen conjuntamente:

- a) Si resultan adjudicatarias, las personas que participen conjuntamente deben constituirse en Unión Temporal de Empresas.
- b) Los contratistas responderán mancomunadamente de las obligaciones contraídas.
- c) Los contratistas responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.
- d) Los participantes de una Unión Temporal de Empresas responderán solidariamente y las personas que participen conjuntamente responderán de forma mancomunada de las obligaciones contraídas.

77. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos:

- a) La duración de los contratos de suministros y servicios será de cinco años, salvo que por circunstancias excepcionales que deberán justificarse expresamente, relativas al objeto de la prestación, fuese necesario un plazo mayor.
- b) La duración de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de compra será de cuatro años, salvo casos excepcionales debidamente justificados en la documentación del contrato.
- c) El plazo de duración de las concesiones de obras públicas será de diez años salvo que por circunstancias excepcionales fuese necesario un plazo mayor.
- d) La duración de los contratos públicos deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

78. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, son causas de nulidad de los contratos públicos:

- a) La adjudicación de un contrato sin anuncio de licitación previo, en todo caso
- b) La utilización del procedimiento negociado con ausencia de negociación efectiva, en aquellos supuestos en que sea posible la concurrencia.
- c) La falta de solvencia técnica o profesional del contratista, pero no la falta de solvencia económica o financiera.
- d) La formalización del contrato tras la resolución de una reclamación en materia de contratación pública contra la adjudicación.

79. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos:

- a) La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración, y deberán determinarse de forma independiente.
- b) La imposición de las penalidades excluye la eventual indemnización a la Administración, ya que se entiende incluida en aquella.
- c) Las penalidades se impondrán por acuerdo de la mesa de contratación, adoptado a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.
- d) Las penalidades se impondrán por acuerdo de la mesa de contratación, adoptado a propuesta de la unidad gestora del contrato, sin audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.

80. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá adquirir bienes y derechos:

- a) Únicamente a título oneroso, sin ejercicio de la facultad de expropiación
- b) Por cualquier modo conforme al ordenamiento jurídico excepto por atribución de la ley
- c) Únicamente a título gratuito, por herencia, legado, donación o por cesión administrativa
- d) Por usucapión, accesión u ocupación.

81. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con lo dispuesto en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra:

- a) El personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra dependerá orgánicamente del departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia.
- b) La oferta de empleo público de puestos al servicio de la Administración de Justicia en Navarra será aprobada inicialmente por el Gobierno de Navarra y se remitirá al Ministerio de Justicia para su aprobación definitiva.
- c) El nombramiento como funcionarios de carrera será expedido por la Dirección General de Función Pública a propuesta del departamento de la Administración de la Comunidad Foral que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia.
- d) Sin perjuicio de la movilidad nacional, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá convocar procesos de movilidad de sus funcionarios para la provisión de puestos de trabajo adscritos a oficinas y servicios de la Administración de Justicia en Navarra.

82. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, en la composición de los Tribunales se velará por el cumplimiento del principio de especialidad en base al cual:

- a) La mayoría absoluta de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso y la totalidad de los mismos, a excepción del Presidente, una de igual o superior nivel académico.
- b) La mayoría absoluta de sus miembros deberá poseer la misma titulación que la exigida para el ingreso y la totalidad de los mismos, a excepción del Presidente, una de igual o superior nivel académico.
- c) La totalidad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso y la mayoría absoluta de los mismos, una de igual o superior nivel académico.
- d) La mayoría simple de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso y el Presidente, una de igual o superior nivel académico.

83. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, cuál de los siguientes no es un procedimiento de provisión de puestos de trabajo reservado a los funcionarios:

- a) Concurso de méritos.
- b) Designación interina.
- c) Promoción interna.
- d) Libre Designación.

84. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policias de Navarra:

- a) El acceso al empleo de Subinspector o Subinspectora se efectuará, sobre las plazas vacantes convocadas, mediante promoción interna desde el empleo de Agente por el procedimiento de concurso-oposición.
- b) El acceso al empleo de Subinspector o Subinspectora se efectuará, sobre las plazas vacantes convocadas, mediante promoción interna desde el empleo de Agente Primero o Agente Primera por el procedimiento de concurso-oposición.
- c) Para participar en el acceso al empleo de Subinspector o Subinspectora se exigirá una antigüedad mínima de cinco años en el empleo de Agente Primero o Agente Primera y la titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel B.
- d) Para participar en el acceso al empleo de Subinspector o Subinspectora se exigirá una antigüedad mínima de tres años en el empleo de Agente y la titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel B.

85. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra:

- a) Podrá acordarse excepcionalmente la enajenación directa de bienes cuando el adquirente sea una Corporación de Derecho Público, o una Asociación o Fundación de interés público reconocida por la Ley.
- b) Podrá acordarse excepcionalmente la enajenación directa de bienes cuando por la naturaleza del bien sea imposible o muy difícil la concurrencia pública.
- c) Podrá acordarse excepcionalmente la enajenación directa de bienes cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido reglamentariamente.
- d) Podrá acordarse excepcionalmente la enajenación directa si se trata de bienes inmuebles y concurren los requisitos precisos para dicha forma de enajenación en la legislación urbanística o en otras leyes sectoriales.

86. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra:

- a) Las copias o extractos de los actos y acuerdos de las entidades locales deberán remitirse al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, y hacerse en el plazo de diez días hábiles posteriores a la adopción de aquellos.
- b) La Administración de la Comunidad Foral podrá solicitar ampliación de la información recibida, que deberá remitirse por la entidad local en el plazo máximo de quince días hábiles.
- c) Es responsable de la remisión de las copias y extractos de actos y acuerdo el Secretario de la Corporación, y de forma inmediata, el Alcalde.
- d) La obligación de remisión de copias y extractos de sus actos y acuerdos afecta tanto a los actos y decisiones de los órganos colegiados de las entidades locales como a los referentes a sus órganos unipersonales.

87. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, cuál de las siguientes autorizaciones ambientales no corresponde al departamento del Gobierno de Navarra con competencia en materia de medio ambiente:

- a) Autorización ambiental integrada.
- b) Autorización ambiental unificada
- c) Evaluación de afecciones ambientales.
- d) Autorización ambiental específica.

88. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas, se considera infracción muy grave:

- a) Efectuar actuaciones que puedan disminuir el valor de las fincas.
- b) Impedir a los técnicos el acceso a parcelas o fincas para el desarrollo de su función.
- c) Efectuar construcciones u otras mejoras en las fincas, sin la autorización procedente una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en infraestructuras agrícolas.
- d) Impedir u obstaculizar la realización de las obras comprendidas en el Proyecto Constructivo aprobado para la zona.

89. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en cuanto a los Planes y Proyectos de Incidencia Supramunicipal:

- a) Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal solo pueden ser promovidos por iniciativa pública.
- b) En la aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra se podrá acordar, en su caso, la declaración de utilidad pública o interés social, así como la urgencia, a efectos expropiatorios.
- c) La Comisión de Ordenación del Territorio, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, acordará, si procede, la aprobación, pudiendo establecer las condiciones que sean precisas o las medidas correctoras necesarias para una mejor ordenación.
- d) Se entenderán desestimadas las solicitudes de aprobación de Planes y Proyectos Sectoriales promovidos por la iniciativa pública cuando, transcurrido el plazo de seis meses desde el ingreso del expediente completo en el registro, no haya recaído resolución expresa.

90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, las ayudas a las actuaciones protegibles en materia de vivienda protegida que legal o reglamentariamente se establezcan se encuadrarán en las siguientes modalidades:

- a) Subvenciones a fondo perdido.
- b) Concesión de préstamos cualificados por parte de entidades financieras al promotor, al adquirente o al adjudicatario, cuyo plazo de amortización no excederá de 30 años.
- c) Subsidiación de los préstamos cualificados, respecto de los que el Gobierno de Navarra podrá adoptar compromisos económicos de plazo no superior a 23 años, incluyendo períodos de carencia que no superen los 3 años y plazos de amortización de hasta 20 años, conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
- d) Reducción o descuento sobre el precio de venta o renta.

91. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de Navarra, en la zona de servidumbre de las carreteras, además de los usos autorizables en las más próximas a la calzada, se podrán autorizar los siguientes usos:

- a) Cultivos agrícolas.
- b) Tala de arbolado.
- c) Plantaciones de arbolado.
- d) Acopio de arbolado.

92. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra:

- a) Las partidas para atender el gasto que se derive de las actuaciones y servicios atribuidos por esta Ley Foral, a la Administración de la Comunidad Foral, no se consignarán en los Presupuestos Generales de Navarra, al tener siempre condición de ampliables, quedando consignadas exclusivamente las partidas para atender las prestaciones sanitarias.
- b) Las partidas para atender el gasto que se derive de las actuaciones, servicios y prestaciones sanitarias atribuidas por esta Ley Foral, a la Administración de la Comunidad Foral, no se consignarán en los Presupuestos Generales de Navarra, al tener siempre condición de ampliables.
- c) En los presupuestos generales de Navarra se consignarán las partidas suficientes para atender el gasto que se derive de las actuaciones, servicios y prestaciones sanitarias atribuidas por esta Ley Foral, a la Administración de la Comunidad Foral.
- d) En los presupuestos generales de Navarra se consignarán las partidas para atender el gasto que se derive de las actuaciones y servicios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, pero no las partidas para atender las prestaciones sanitarias proporcionadas por el mismo.

93. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, cuál de las siguientes competencias NO corresponden al Gobierno de Navarra:

- a) Aprobar los planes estratégicos de servicios sociales de Navarra, y remitirlos al Parlamento de Navarra para su pronunciamiento.
- b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de unas prestaciones mínimas homogéneas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
- c) Aprobar los planes sectoriales y programas básicos o comunitarios y especializados de servicios sociales de ámbito general.
- d) Impulsar la coordinación del sistema de servicios sociales.

94. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, qué radio máximo se aplica para ofrecer otra vivienda protegida adecuada cuando la actual es inadecuada:

- a) 10 kilómetros, medidos en línea recta desde la vivienda inadecuada.
- b) 20 kilómetros, medidos en línea recta desde la vivienda inadecuada.
- c) 15 kilómetros, medidos en línea recta desde la vivienda inadecuada.
- d) 25 kilómetros, medidos en línea recta desde la vivienda inadecuada.

95. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, se entienden domiciliadas fiscalmente en Navarra, entre otras, las personas jurídicas que:

- a) Tengan en Navarra su domicilio social, aunque no gestionen allí sus negocios.
- b) Tengan en Navarra su domicilio social y allí esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
- c) Únicamente realicen ventas en Navarra.
- d) Tengan inscrito su NIF en Navarra.

96. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Foral 34/2022, de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, el órgano de representación, consulta y participación en materia de consumo del que formarán parte representantes de las asociaciones u organizaciones de personas consumidoras o usuarias, de las asociaciones de personas empresarias o profesionales, de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, y de las administraciones públicas se denomina:

- a) Junta Arbitral de Consumo de Navarra.
- b) Agencia Navarra de Consumo.
- c) Observatorio de Consumo de Navarra.
- d) Consejo Navarro de Consumo.

97. Indique cuál de los siguientes instrumentos NO es un instrumento de ordenación territorial de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo:

- a) La Estrategia Territorial de Navarra.
- b) Las Directrices de Ordenación Territorial.
- c) Los Planes Directores de Acción Territorial.
- d) Los Planes de Ordenación Territorial.

98. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, la competencia en materia de políticas de igualdad estará atribuida:

- a) Al Departamento de Presidencia.
- b) Al departamento al que se atribuya la competencia, de acuerdo con los decretos de estructura orgánica que se aprueben.
- c) Al Departamento de Presidencia, o en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
- d) Al departamento al que se le atribuya la competencia en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

99. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, en relación con las travesías:

- a) El procedimiento para la ejecución y financiación de obras en las travesías se determinará reglamentariamente.
- b) El procedimiento para la ejecución y financiación de obras en las travesías se determinará por la entidad local por la que discurre la travesía.
- c) El procedimiento para la ejecución y financiación de obras en las travesías se determinará por el Departamento competente en materia de carreteras.
- d) El procedimiento para la ejecución y financiación de obras en las travesías se acordará entre la entidad local por la que discurre la travesía y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

100. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de derechos culturales de Navarra:

- a) El horario de acceso gratuito para todo el público se valorará como criterio para la concesión de subvenciones de funcionamiento a museos y colecciones museográficas permanentes.
- b) Solo las personas residentes en Navarra tienen derecho a acceder a los museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.
- c) En las bases reguladoras de las subvenciones que se concedan a los museos y colecciones museográficas permanentes en virtud de partidas nominativas contempladas en los Presupuestos Generales de Navarra, no podrá establecerse un horario de acceso gratuito para el público.
- d) Los museos y colecciones museográficas permanentes de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra tendrán, como mínimo, dos días a la semana de acceso gratuito para todo el público.